



## Consejo Económico y Social

Distr. general  
6 de diciembre de 2013  
Español  
Original: inglés

---

### Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

58º período de sesiones

10 a 21 de marzo de 2014

Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”: consecución de los objetivos estratégicos, adopción de medidas en las esferas de especial preocupación y otras medidas e iniciativas

### **Declaración presentada por Católicas por el Derecho a Decidir, organización reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social**

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.



## Declaración

### **Desafíos y logros en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para la mujer y la niña: una perspectiva católica**

#### **Antecedentes**

Católicas por el Derecho a Decidir determina y promueve una ética sexual y reproductiva basada en la justicia social, mantiene un compromiso con el bienestar de la mujer y respeta y afirma la capacidad de la mujer y el hombre para tomar decisiones morales sobre sus propias vidas. Mediante el diálogo, la educación y las actividades de promoción, Católicas por el Derecho a Decidir trabaja con católicos por el derecho a decidir en África, América, Asia y Europa y con encargados de formular políticas y activistas de todo el mundo que comparten nuestros objetivos.

#### **Introducción**

El desarrollo económico y humano de las mujeres y las niñas es motivo de gran preocupación para los católicos de todo el mundo. Recocemos que las mujeres y las niñas siguen siendo víctimas de un empobrecimiento desproporcionado, carecen de acceso a oportunidades educativas y de otro tipo y son marginadas en mayor medida que los hombres. Nuestra tradición religiosa nos enseña a optar de manera preferente por los pobres y a respetar la dignidad de todos.

Los católicos están a la vanguardia de la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas, al tiempo que les proporcionan ayuda de importancia crucial, apoyo y servicios. Lamentamos, no obstante, que la jerarquía de la Iglesia haya establecido protocolos en las instituciones dirigidas por católicos que obstaculizan la plena realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dichos protocolos se basan en la interpretación más ortodoxa posible de la doctrina católica en materia de género y en cuestiones sexuales y reproductivas, mucho más conservadora que la propugnada por la mayoría de los católicos.

Una y otra vez, los representantes de la jerarquía católica han utilizado a las Naciones Unidas como un foro en el que socavar los progresos en las políticas de desarrollo que afectan directamente a las mujeres y a las niñas. Este enfoque hostil hacia la salud y los derechos sexuales y reproductivos ignora el abrumador apoyo de católicos y no católicos a dichas normas internacionales, adoptadas por 179 naciones en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y ratificadas por la inmensa mayoría de los Estados Miembros. Los representantes de la jerarquía católica en las Naciones Unidas se han esforzado por obstaculizar los avances en salud y derechos sexuales y reproductivos, labor que contrasta absolutamente con las políticas adoptadas por la comunidad mundial y las creencias de la mayor parte de los 1.000 millones de católicos de todo el mundo.

### **Quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio – Mejorar la salud materna**

En todo el mundo, la falta de acceso a información y métodos de planificación familiar está detrás de numerosos casos de salud materna deficiente. Las Naciones Unidas consideran que satisfacer la necesidad no atendida de planificación familiar podría reducir el número de muertes maternas en casi una tercera parte. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), al menos 200 millones de mujeres en todo el mundo desean utilizar métodos de planificación familiar, pero no pueden por falta de acceso a la información y a los servicios necesarios.

Los centros sanitarios gestionados o financiados por la jerarquía católica niegan a las mujeres que lo solicitan el acceso a la gran variedad de opciones de planificación familiar existentes hoy en día. Según el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios, las instituciones católicas gestionan el 26% de los centros sanitarios de todo el mundo, es decir, 117.000 centros sanitarios y 18.000 farmacias. En consecuencia, muchas mujeres se enfrentan a obstáculos a la hora de obtener los métodos de planificación familiar que necesitan. Asimismo, debido a las directrices de la jerarquía católica, las mujeres que quedan embarazadas tras una agresión sexual no pueden poner fin a su embarazo de manera segura en una institución católica, y con frecuencia se les niegan también anticonceptivos de emergencia.

La realización del quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio, meta 5.A, de reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna, se ha visto comprometida por la elevada incidencia de abortos realizados sin condiciones de seguridad. El Instituto Guttmacher calcula que el 13% de las muertes maternas que se producen en el mundo se debe a las complicaciones producidas por abortos practicados en condiciones de riesgo. La inmensa mayoría de dichas muertes puede prevenirse, tal y como demuestran los bajos índices de mortalidad materna debida a abortos realizados sin condiciones de seguridad en los países desarrollados. Son fundamentalmente las mujeres pobres de los países en desarrollo las que mueren a causa de dichas complicaciones. La posición actual de la jerarquía católica es la oposición al aborto en todas las etapas del embarazo y por cualquier motivo, aun cuando sea necesario para salvar la vida de la mujer. Las actividades de cabildeo de la jerarquía católica en las Naciones Unidas y en otros lugares han obstaculizado la labor de mejora del acceso a servicios de aborto en condiciones de seguridad y, por ende, la reducción de las tasas de mortalidad materna, especialmente en África y América Latina.

Finalmente, la práctica de la jerarquía católica de dar preferencia a la conciencia de los proveedores de servicios de salud por encima de las necesidades de los pacientes deja a muchas mujeres y niñas sin acceso a servicios de planificación familiar. Se permite que el personal médico que no esté de acuerdo con la prestación de determinados servicios deje de prestarlos, incluso en situaciones de crisis. Esto sucede tanto en centros sanitarios católicos como en centros sanitarios públicos. En contraposición al número relativamente reducido de personas que componen la jerarquía de la Iglesia, muchos más católicos se muestran en desacuerdo con que se dé preferencia a las creencias personales de los proveedores de servicios de salud por encima de las necesidades de un paciente. Dicha preferencia contradice la doctrina católica sobre el respeto a la conciencia individual y la compasión hacia los demás. Por otra parte, debido a tales políticas, el

personal sanitario que estaría dispuesto a realizar servicios prohibidos por el Vaticano no puede seguir su propia conciencia.

**Sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio – Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades**

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente la mitad de los 40 millones de personas que viven con el VIH son mujeres, y en todo el mundo la tasa de infección por el VIH es mayor en las mujeres que en los hombres. El 57% de las personas que viven con el VIH en África Subsahariana son mujeres, y, entre ellas, son las mujeres jóvenes las que se encuentran en situación de mayor riesgo.

Las organizaciones vinculadas a la Iglesia católica constituyen el mayor porcentaje de instituciones que proporcionan cuidados a pacientes afectados por el VIH y el SIDA, por cuanto, a nivel mundial, una cuarta parte de dichos cuidados corren a cargo de organizaciones y centros católicos. La política oficial de la jerarquía católica, que se niega a aceptar el uso de preservativos para luchar contra el VIH y el SIDA, hace que aumente aún más el riesgo de infección entre las mujeres y las niñas. Miembros de la Iglesia católica han propagado de manera reiterada información errónea sobre la seguridad y eficacia de los preservativos, y se prohíbe al personal sanitario católico que distribuya preservativos y aliente su uso.

En un marcado contraste con la posición de la jerarquía católica, los católicos de todo el mundo apoyan el uso de preservativos para prevenir el VIH. En una encuesta realizada en 2007 por la empresa de investigación independiente Belden Russonello and Stewart entre 4.465 católicos de los Estados Unidos de América, Filipinas, Ghana, Irlanda y México, el 60% o más de los encuestados en cada país respondió “sí” a la pregunta de si debía exigirse a los hospitales y clínicas católicos financiados por el gobierno que incluyeran preservativos en la prevención del VIH. Asimismo, la mayor parte de los católicos encuestados en todos los países, incluido el 90% de los encuestados en México y el 86% de los encuestados en Irlanda, se mostraron de acuerdo con la afirmación de que “la utilización de preservativos es favorable a la vida porque ayuda a salvar vidas al prevenir la propagación del SIDA”.

Incluso el Papa Benedicto XVI ha expresado su desacuerdo con una postura totalmente restrictiva con respecto a los preservativos. El 20 de noviembre de 2010, cuando el *Telegraph* (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) le preguntó si podía aceptarse el uso de preservativos, el entonces Papa Benedicto afirmó, según el periódico, que en algunos casos en los que la intención es reducir el riesgo de infección puede, no obstante, ser el primer paso hacia otra sexualidad, más humana. Desgraciadamente, muchas personas, especialmente mujeres y niñas, no se benefician todavía de suficiente acceso a los preservativos para protegerse contra la infección por el VIH, ya que, en la práctica, la actitud de la jerarquía católica hacia los preservativos no se ha modificado. Como resultado, se niega a las mujeres y las niñas cuya atención sanitaria depende de instituciones católicas el acceso y la información sobre los preservativos y su uso para la prevenir la transmisión del VIH, excepto en aquellos casos en los que los trabajadores sanitarios deciden no cumplir las normas.

Teniendo en cuenta que, a lo largo de 2012, 1,6 millones de personas murieron por causas relacionadas con el SIDA y 2,3 millones sufrieron contagio, la prohibición reiterada por parte de la jerarquía católica del uso de preservativos resulta inadmisibles. Todos los años, grupos católicos que prohíben los preservativos reciben cientos de millones de dólares, euros y otro dinero público para prestar servicios, con frecuencia en zonas en las que no hay otros proveedores de servicios de salud. Las mujeres y las niñas que viven en dicha zonas no tienen más opción que renunciar a la herramienta más eficaz y probada para prevenir la infección por el VIH. La negativa de la jerarquía católica de reconocer el valor de los preservativos en la prevención del VIH representa un grave obstáculo a la consecución del sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas.

### **Conclusión**

El acceso a una atención sanitaria sexual y reproductiva integral es vital para la salud y los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Durante décadas, las Naciones Unidas han trabajado para mejorar la salud materna y luchar contra el VIH y el SIDA. Lamentablemente, dicha labor se ha visto obstaculizada por la oposición de la jerarquía católica, por motivos ideológicos, a unas prácticas adecuadas de salud pública. Es responsabilidad de las Naciones Unidas y de los Estados Miembros promulgar y aplicar los marcos jurídicos y políticos adecuados para que las mujeres y las niñas puedan disfrutar de todos sus derechos humanos. En el contexto del examen de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Católicas por el Derecho a Decidir pide a todas las partes del sistema de las Naciones Unidas que reconozcan el daño causado a las mujeres y a las niñas por la resistencia de la jerarquía católica a la plena realización de los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas para que rechacen toda influencia adicional ejercida por la jerarquía católica y las organizaciones vinculadas a ella que pueda limitar el acceso a estos servicios esenciales que salvan vidas.

---